

Atentados: palabras y hechos

LAS palabras —condenatorias, dolorosas, indignadas, analíticas, serenas...— se repiten: los atentados continúan. Los policías ametrallados —uno, muerto— el viernes en Madrid, el vigilante de fábrica —brigada de la guardia civil jubitado— asesinado el mismo día en Guipúzcoa producen, inevitablemente, las mismas palabras. No hay otras. El riesgo es que se van convirtiendo en tópico, en fórmula. Constituyen un mensaje de la sociedad, por medio de sus órganos de expresión, transmite a las víctimas. Es también una solicitud. El mensaje expresa la solidaridad y la repulsa, y el pesar. Puede llegar a ser algo tan inútilmente ritual como el "Le acompaño en el sentimiento" y el eco posterior de "Lo mismo digo". La solicitud es la de que no se pierdan los nervios, la calma. Que sepan discernir entre los verdaderos enemigos, entre los verdaderos asesinos, y todas las demás fuerzas políticas de la nación, la inmensa mayoría, por no decir la totalidad del país. El análisis repite las mismas constantes. La misma naturaleza de los sucesos, al elegir víctimas indiscriminadas, al dirigirse a un informe, a un estamento y no a un individuo —por lo menos, en el caso de Madrid, y en el de la semana anterior en Vitoria; el de Guipúzcoa podría tener otro significado— indican que se trata de soliviantar a este grupo. Se dicen en los análisis que se trata de un atentado contra la democracia, dada la provocación absolutamente dirigida. Eso es tanto como suponer que las fuerzas así heridas, así atacadas, van a suponer culpable a la democracia. Por lo menos, de su indefensión.

La realidad es que esta parte de democracia que tenemos no



está consiguiendo algo que debía ser primordial: identificar la imagen de los cuerpos defensores del orden público con la idea de las libertades individuales, y con la de las nuevas libertades colectivas. La aparentemente sencilla cuestión de que quienes defendían una legalidad puedan defender hoy otra no consigue ser representada por el Gobierno con la suficiente claridad. Y a que no esté claro contribuyen los sectores del país que defendían o defienden la otra legalidad —y tienen más fuerza y más razones cuanto más tarde en cuajar en cuerpo de doctrina constitucional, y en desarrollos en leyes de esa doctrina, la nueva legalidad— que tratan por todos los medios de inculpar la situación actual de todos los desórdenes y, por supuesto, de todos los atentados.

Es posible que el Gobierno esté perdiendo una noción de la realidad española y que se entregue al apasionante juego de la política de cámara. Existe la posibilidad de que no perciba con toda su crudeza la gravedad del momento del país, como la perciben los autores de los asesinatos. Si una manera de restaurar el orden es la de perseguir con dureza, pero también con seguridad y sin desviaciones, toda forma de desorden visible, otra y muy importante, quizá la más importante, es la de atajar el desorden invisible, la de crear con seguridad un sistema tan sólido y tan sin dudas de ninguna clase que los que provocan sepan que su provocación no puede conducir a destruirlo.

Lo demás son palabras. Decir todos, como lo decimos y como lo sentimos profundamente, que cada nueva sangre es una herida en nuestra conciencia de ciudadanos no basta. Es el único recurso que tenemos los que no tenemos más que las palabras, la política de las palabras. Los que tienen la política de los hechos tienen que proceder con una rapidez que, hasta ahora, les está faltando. ■



Catalunya

Con la muerte del "alcalde automático" ha estallado la paz

EL voto coincidente de todos los partidos catalanes —y los no catalanes— en torno a la enmienda de Jordi Solé Tura (PSUC-PC) sobre el sistema de elección de alcalde, ha introducido un elemento de pacificación en el panorama político catalán. Se temía con toda razón que se truncara el feudo unitario que ha supuesto Catalunya en los últimos años del franquismo con proyección sobre el casi primer año ya de la etapa democrática; porque si bien en torno a la candidatura senatorial de la Entesa dels Catalans no se pudieron aunar los votos pujolistas, los dos senadores obtenidos por este partido se incorporaron posteriormente a la Entesa, con lo que desaparecieron así los rasguños electorales.

Durante toda la semana pasada se temía en Catalunya, tras el portazo unilateral de Peces-Barba a la ponencia constitucional y la temida coincidencia UCD-PSOE para imponer el "alcalde automático", que el clima tenso que los propios políticos catalanes viven y protagonizan en Madrid pudiera trasladarse a Catalunya. Sólo faltó que un político cuyo nombre no viene al caso declarase por radio que no sería tan extraño que su partido diera el portazo, en este caso, en el Consell de la Generalitat.

Mientras esta tensión persistía, los agricultores catalanes tomaban las carreteras, los universitarios movilizados en torno a la libertad de expresión protagonizaban un "revival" con todo lujo de barricadas que los resituaba en el centro de la actividad ciudadana y Barcelona entre tanto también se quedaba sin pescado fresco durante el fin de semana por una guerra a muerte de pescadores barceloneses y de Vilanova que se disputan las pocas sardinas que quedan en el contaminado Mediterráneo. Como remate llegaba el nombramiento del ministro Landelino Lavilla, encargado del "despacho universal" como se decía en el siglo pasado, para presidir la comisión mixta de trasposos de competencias entre Gobierno y Generalitat. Donde habla un valenciano como Abril Martorell —probablemente el menos autonomista de los valencianos que se ha conocido jamás— el Gobierno ha puesto ahora un leridano, poco más autonomista que su predecesor.

Pero con el acuerdo sobre la elección de alcaldes tomado en el inabarcable pleno de aquella madrugada en que las esposas de los diputados de ponencias temieron, si no lo peor, sí algo grave, se ha logrado superar el difícil momento unitario: finalmente los partidos votaron juntos por una fórmula más democrática, menos bipartidista y más favorecedora del Gobierno eficaz de los municipios.

La repercusión de esta coincidencia en Catalunya ha sido alta, como lo hubiese sido, y en estas páginas ya se anunció que lo era, un voto opuesto de socialistas y comunistas, de convergentes y ucedistas. Sin ir más allá de Cornellá, ciudad que está a 6 kilómetros de Barcelona, ya circulaba una carta de oposición al proyecto de Ley municipal firmada por los presidentes de entidades de todos los gustos y tendencias, socialistas incluidos, que hubieran situado a las direcciones locales de los partidos que apoyaban el "alcalde automático" en una incómoda posición.

Pasado el peligro, siguen observándose algunos fognazos aislados: de tanto en tanto, desde las trincheras de algún diario y casi siempre anónimamente se le suelta un perdigonazo al senador Benet, portador de la Entesa, a quien una coalición que le apoyó el 15 de junio lo ha vetado recientemente para que intervenga en un acto de solidaridad con Argentina. Se desconoce el motivo exacto de la tensión, aunque algunas acusaciones hagan referencia a un exceso de protagonismo de Benet, en cualquier caso el más "full-time" y trabajador de los senadores catalanes.

La Entesa, herencia de la Asamblea de Catalunya según algunas opiniones, testimonio polémico pero vivo de esa tradición unitaria, está a punto de entrar en crisis, si no política, sí al menos económica. Aunque dé mucha vergüenza decirlo, la comida de hermandad a la que debían asistir los parlamentarios aragoneses en Valls, ha tenido que ser suspendida por falta de dinero en la caja de la coalición senatorial, aunque la excusa ofrecida a los invitados haya sido otra menos prosalca. Persisten las diferencias sobre cómo repartir el dinero que el Gobierno entregó a la Entesa por su victoria, es decir, a tanto el voto y a tanto el senador. Esos fondos siguen intactos, pero sin utilizar hasta que se resuelva con qué criterios debe hacerse el reparto entre la propia Entesa y los partidos que la apoyaron.

A nadie se le ocurre que el tema de fondo es una peseta de más o de menos. Es evidente que hay un problema político, aunque no se exprese todavía con claridad y siga siendo una incógnita para el gran público. De todos modos sería éste un buen momento propiciado por la fiesta en torno a la muerte del "alcalde automático", para aclarar de una vez el futuro de la coalición senatorial y sacar de la miseria a esta reliquia unitaria que casi todos los partidos quieren seguir venerando. ■ MANUEL CAMPO VIDAL